



Frontera sur: otro exceso de los militares

(Isaín Mandujano, pág. 22-24)

La muerte del guatemalteco Elvin Mazariegos en un retén militar desató la furia en la zona fronteriza. Una multitud desarmó a los soldados y los llevó a un lugar de difícil acceso, ya muy cerca del país vecino. En la negociación para liberarlos, el gobierno federal se comprometió a indemnizar a la familia del fallecido y el Ejército a procesar al autor de los disparos. Al respecto, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos insis ten en que ese es uno de los peligros de la militarización de la seguridad en la administración de López Obrador.

Militares mexicanos, acusados de asesinar a un ciudadano guatemalteco, fueron retenidos por una turba que los desarmó, los humilló y los llevó por la fuerza hasta una región cercana a los límites con Guatemala.

El 29 de marzo pasado, un grupo del 15 Regimiento de Caballería Motorizada de la 31 Zona Militar de Comitán se encontraba en un puesto de control a la altura del poblado Barrio San José Bacantun, municipio de Mazapa de Madera, entre Motozintla y Frontera Comalapa, en la región fronteriza de la Sierra Madre de Chiapas. En esos rumbos abundan los ciudadanos guatemaltecos que compran abarrotes al mayoreo en las numerosas bodegas del lado mexicano. El favorable tipo de cambio -2.65 pesos por quetzal- hace que miles de chapines ingresen o se acerquen a México para comprar todo lo que pueden.

Ese lunes 29 se encontraban en el destacamento los sargentos segundos de caballería Valentín Prado Quinto y Martín Mar Alonzo, el soldado de sanidad José Alexander Pineda Nulitagua y los soldados de caballería Ronay Alejandro Vázquez Gómez, Ariel Ruiz López y Pedro Carrión Rivera.

Ellos pretendieron detener una camioneta Mitsubishi gris que provenía de Motozintla rumbo a territorio guatemalteco, a fin de revisarla, pero en la versión de los militares- los ocupantes del vehículo con placas de Guatemala intentaron evadir el retén y tuvieron que dispararles. Dos tiros atravesaron el parabrisas.

En el asiento del copiloto quedó muerto Elvin Mazariegos Pérez, de 30 años, con un impacto en el cuello y otro en el pecho. El conductor, Dylan López, logró bajarse y cubrirse. Un tercer ocupante, de quien no se dijo su nombre y que había pedido "un aventón" e iba en la góndola de la camioneta, logró escapar de ahí.

En una entrevista de Radio Única Tacaná, transmitida en redes sociales, Dylan López dijo que efectivamente él y su amigo Mazariegos venían de Motozintla y le dieron aventón a otra persona para ingresar a Guatemala, pero asegura que al aproximarse al retén los militares empezaron a dispararles. Ahí vio morir a su amigo. Al revisar la camioneta los militares no encontraron armas ni drogas.



En la entrevista López señaló que la familia de Mazariegos exige pensión para sus hijos.

El oficial de sanidad José Alexander Pineda intentó darle los primeros auxilios a Elvin, pero ya era demasiado tarde. El sonido de los balazos hizo que se reuniera en el lugar la gente de las casas y parajes cercanos.

En la zona casi no llega la señal de telefonía celular e internet. Muchas personas operan con equipo de radiocomunicación: los comerciantes y sus clientes, pero también los halcones de los grupos delictivos que trafican migrantes, combustible, azúcar, ganado, armas, drogas y otras mercancías ilícitas.

Los uniformados fueron rebasados por la multitud, que de inmediato les exigió cuentas, los sometió, desarmó y video grabó con celulares, además de humillarlos. Después, el gentío se llevó a 14 soldados hacia los límites del territorio guatemalteco como rehenes, para exigir la llegada de las autoridades y negociar su liberación a cambio de que se hiciera justicia y se indemnizara a la familia del fallecido.

Esa misma tarde fueron liberados varios soldados, pero seis se quedaron en manos de sus captores, quienes también retuvieron 17 fusiles de uso exclusivo del Ejército y tres vehículos militares.

Tropas de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y policías del estado se movilizaron para intentar rescatar al personal detenido, pero ya estaban en una intrincada zona montañosa cerca de la frontera. Durante casi 10 horas las autoridades mexicanas perdieron la pista de los militares plagiados, a quienes les había tocado vigilar precisamente ese paso casi clandestino, porque ahí no hay autoridad aduanal que supervise el tráfico entre ambos países.

Victoria, una víctima de la “barbarie”

(Rosa Santana, pág. 25-27)

La causa del asesinato de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar a manos de policías municipales de Tulum, dicen especialistas en seguridad, fue la “barbarie” resultante de la falta de humanidad y la incapacidad de los agentes para aplicar los protocolos correspondientes, copiados del modelo estadounidense en la ley nacional.

TULUM, QR.- Cerca de las 19:00 horas del 27 de marzo, en la esquina de La Selva y Faisán, de la colonia Tumbenkán en esta ciudad, se cruzaron los destinos de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza y de la policía municipal Verónica V., quien, carente de formación profesional, mató a la primera al someterla de la única manera que supo: mediante la fuerza bruta.



Originaria de Sonsonate, El Salvador, cuna de sanguinarias pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, Victoria, quien al fallecer tenía 36 años, huyó de la miseria y la violencia en su país en 2016 junto con sus dos hijas, F y E, actualmente de 17 y 15 años. Llegaron a Quintana Roo en 2018, al parecer desde Tapachula, como parte de un programa de acogida temporal por razones humanitarias que le permitió vivir y trabajar legalmente en la entidad.

Victoria formó pareja con el tabasqueño Héctor H., de 35 años, con quien vivía en extrema pobreza en el asentamiento irregular 2 de Octubre, en un ambiente de hacinamiento y violencia doméstica con sus dos hijas y cuatro hijastros. El 6 de marzo, en respuesta a un reporte de su concubino, la policía detuvo por primera vez a Victoria y la presentó ante el juez civil por una falta administrativa. Había bebido de más. Pero cuando los agentes se la llevaban suplicó a gritos que no dejaran sola a una de sus hijas con el padrastro porque ya la había violado. La otra había escapado del hogar. Por eso el DIF acudió por la menor en peligro y la mantuvo bajo resguardo hasta después de la muerte de la madre, en espera de la llegada de sus familiares.

El 31 de marzo, cuando dio a conocer que Héctor había sido detenido el día anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que el jurídico del DIF de Tulum después de verificar mediante entrevistas y estudios que la menor era una víctima-denunció el 11 de marzo el abuso sexual a que fue sometida, aunque la investigación fue lenta debido a que Victoria no pudo presentarse a ratificar la denuncia, como legalmente procedía.

La institución emitió una alerta ámber para localizar a la otra hija de Victoria, quien horas más tarde salió de su escondite y acudió a las instalaciones del Ministerio Público en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, donde aún permanecía el cuerpo de su madre en la morgue sin ser formalmente identificado.

Fue F, la joven que escapó, quien al difundirse en las redes sociales los videos de la muerte de Victoria contactó a través de una cuenta falsa al periodista Pedro Canché, director del sitio pedrocanche noticias, para identificar a la mujer fallecida como su madre. Como señas particulares refirió sus tatuajes. También le dijo que estaba enferma del corazón y padecía ataques de ansiedad. Al reaparecer en la FGE, donde se topó con Canché, la chica pidió al comunicador que le hiciera saber al presidente de su país, Nayib Armando Bukele, que ella no desea volver a El Salvador.



La política migratoria de México criminaliza, reprime, asesina..

(Patricia Dávila, pág. 28-30)

Para los representantes de organizaciones defensoras de migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Amnistía Internacional, el discurso humanitario del presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratarlos como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Para esas y otras organizaciones civiles, los recientes asesinatos de migrantes demuestran que el muro militar no detendrá el flujo de personas y, en cambio, seguirá cobrando vidas.

Los asesinatos de centroamericanos ocurridos recientemente en México, uno en Tulum y otro en Chiapas, provocaron que organismos de la sociedad civil acusen de nuevo al Estado mexicano y al gobierno federal de invisibilizar a los migrantes, de no respetar los derechos humanos y de responder a la política de Estados Unidos en la materia.

En entrevista con Proceso, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba.), explica: "Hemos denunciando que no hay una clara política de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como discursivamente se dice, desde la imposición de Donald Trump del famoso muro. Aunque el muro real ha sido Chiapas, donde hay más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional, además del Ejército y policía esta tal, deteniendo a quien quiera pasar hacia México; y a quienes lo logran los colocan en lugares infrahumanos".

Desde el punto de vista del Frayba, señala Faro, a las autoridades les falta diseño operativo y estrategia, porque en el afán de controlar que no pase nadie se hacen una serie de acciones como la ejecución extrajudicial que cometió el Ejército contra el guatemalteco Elvin Mazariegos el pasado 29 de marzo.

Agrega: "Vimos que con la pandemia, en los lugares donde trabajamos bajó el tránsito de migrantes. Ahora que se supone hay una baja en la pandemia se está reactivando la entrada de grupos que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En San Cristóbal, un lugar que está muy cerca de todas las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales, hay viajes directos a Tijuana y Sonora para que puedan pasar a Estados Unidos. Anuncian públicamente que hay salidas a diario. También entran camiones que enganchan a la gente para llevarla. La autoridad lo sabe y lo permite. "El sistema no está respondiendo y por lo tanto está generando una crisis que rebasa al Estado mexicano. Entonces su única forma de actuación, desde nuestro punto de vista incorrecta, es la represión. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chiapas hacen redadas para reprimir a los migrantes y para inhibir su paso a México".



Sin embargo, esto no se admite oficialmente: "Hay un doble discurso del presidente. Dijo que se respetaría el flujo migratorio, pero lo que se está viendo es un vacío de derechos humanos desde la Presidencia, lo vemos en todos los temas, en el tema de tortura, en el tema de desapariciones, en el tema migratorio".

Por ello, Faro considera que el flujo de migrantes va a seguir creciendo conforme se vaya controlando la pandemia hasta llegar a una medida similar a la de las caravanas de 2018 y 2019, pues se juntan personas de diferentes países para pasar la frontera. De esa manera intentan protegerse del crimen organizado, porque entrando a Chiapas empieza el infierno", señala el activista

Es más, añade, en Chiapas las autoridades parecen permisivas frente a los criminales que agredan a los migrantes. En las entrevistas con víctimas, éstas mencionan al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a las maras, que operan en la frontera, por donde transita el tren conocido como La Bestia.

"Del lado de la selva, el cártel que se maneja es el de Los Zetas. Aunque han ido perdiendo control territorial, se ubican sobre todo en la parte de Benemérito de las Américas y los Altos. Por San Cristóbal, el más visible para los migrantes es el Chamula, que en complicidad con las autoridades comete violaciones, robos, torturas y extorsiones a las familias de los migrantes en el país de origen. "Más adelante, adentrándose en el país, los enganchan para hacer trabajos del crimen organizado o llevan a las mujeres a centros de prostitución. Hay asesinatos y desaparición forzada. Es allí en donde está la complicidad del Estado. Incluso agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido parte del mismo negocio", señala el representante de Frayba.

Criminalización y discriminación

Brenda Ochoa Ortiz, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, apunta:

"Fray Matías y otras organizaciones monitoreamos el despliegue de la Guardia Nacional y de los cuerpos de seguridad por el tema migratorio. Desde hace dos años, con la llegada del presidente López Obrador, vemos que la política aplicada y los discursos son contradictorios. Dice que son operativos de rescate humanitario, mientras pasan cosas lamentables, como estas muertes (de Victoria Salazar y Elvin Mazariegos)".

Observa que ese trato es de criminalización y no de protección internacional. Los migrantes llegan por un desplazamiento forzado desde sus países y con el discurso oficial eso se vuelve invisible, lo que hace retroceder varios años el respeto a los derechos humanos de esos grupos de personas.



"En marzo -prosigue Faro- hemos estado monitoreando la frontera sur, en el puente Rodolfo Robles. Acompañamos a 12 familias de diversas nacionalidades. La primera vez que llegaron a presentar su solicitud de refugio, en el puente se les rechazó a todas. Tuvieron que regresar y esperar para que nosotros los pudiéramos acompañar en su presentación e ingresaran al territorio presentando una solicitud."

Señala que el asesinato de dos migrantes por cuerpos de seguridad hace reflexionar que no es un hecho aislado, sino parte de la criminalización hacia los migrantes, mezclada con discriminación y xenofobia muy arraigada.

Define la postura del actual gobierno "como una política de invisibilización de las causas del desplazamiento forzado, de represión, de criminalización y de retención de migrantes y refugiados".

El Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la frontera sur de México, elaborado por más de una docena de organizaciones civiles, recoge múltiples historias que muestran el uso desproporcionado de la fuerza por las corporaciones mexicanas de seguridad.